

**Fecha Sanción** 3 Feb. 1992  
**Publicado en Boletín Oficial** B.O.N° 12/92 - PAG. 213/16  
**Extracto** ADMITASE RECURSO DE RECONSIDERACION INTERPUESTO POR LA FISCALIA DE ESTADO Y DEJASE SIN EFECTO EL DCTO. N° 2082 DEL 20NOV90.-

**VISTO:**

El Recurso de Reconsideración interpuesto por la Sra. Fiscal de Estado Dra. Amelia SESTO de LEIVA, con fecha 26 de Diciembre de 1991, en contra del Decreto N° 2082 de fecha 20 de Noviembre de 1990, emitido en el Expte. Letra "M" N° 10881/90 s/Ministerio de Producción y Finanzas Públicas s/Apruébase Convenio con la Provincia de Catamarca y TELECOR S.A. Autorízase a depositar honorarios a Profesionales; y

**CONSIDERANDO:**

Que la impugnación planteada es realizada por la Fiscal de Estado en mérito al Artículo 162° de la Constitución de la Provincia, que prescribe que "... deberá recurrir de toda ley, reglamento, decreto, contrato o resolución contrarias a esta Constitución o a los intereses patrimoniales y derechos de la Provincia...";

Que la funcionaria advierte que, no obstante que por mandato constitucional el Fiscal de Estado es "el encargado de defender el patrimonio de la provincia y será parte legítima en los juicios en que se contraviertan intereses o derechos provinciales, no se le ha conferido participación a ese organismo, en el juicio sustanciado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, caratulado: "TELECOR S.A. C/PROVINCIA DE CATAMARCA" - RESTITUCION DE INMUEBLE" (Expediente N° 245);

Que la primera noticia del caso por parte del Fiscal de Estado está dada por un oficio judicial, proveniente del Tribunal mentado, con fecha 26 de Noviembre de 1991;

Que ante el desconocimiento del caso, y la inexistencia de cualquier antecedente en Fiscalía de Estado, se procedió a requerir informes a la Contaduría General de la Provincia, la que remite los obrados señalados en el exordio;

Que también se requirieron antecedentes a la Casa de Catamarca en Capital Federal, remitiendo ésta una transcripción de los alegatos del juicio, y una nota en la que consta directamente el poder conferido por el entonces Gobernador Dr. Vicenta L. SAADI, a los Dres. BARRA y BIANCHI, para representar a la Provincia con fecha 29 de Febrero de 1988;

Que en expediente referenciado, obra un Convenio Transaccional por el que, TELECOR S.A. renunció a los daños y perjuicios contra la Provincia de Catamarca derivados de la ocupación ilegítima de la repetidora de Canal 12 de Córdoba en la Sierra de Ancasti, haciéndose cargo la Provincia de Catamarca de las costas del juicio, pactándose un honorario a favor del abogado de TELECOR S.A. Dr. Carlos A. TAU ANZOATEGUI de U\$S 1.440.000, y para los letrados de la Provincia, de U\$S 50.000, (cláusula cuarta);

Que por la cláusula quinta del convenio las partes establecieron que el honorario convenido no será gravado en materia impositiva y la Provincia de Catamarca se hace cargo de los montos que resultaren por tal concepto;

Que la cláusula séptima prevé que en caso de falta de pago la mora será automática, y se autoriza a la ejecución inmediata del honorario del Dr. TAU ANZOATEGUI que devengará un interés punitivo del uno por ciento (1% diario de mora);

Que en caso de ejecución la Provincia de Catamarca renuncia a invocar cualquier norma de emergencia que demore o postergue la ejecución del crédito;

Que el Convenio fue firmado por el Ministro de Hacienda CPN Carlos E. BOGOMOLNY, en representación de la Provincia y su letrado apoderado Dr. Angel Alberto BIANCHI y por TELECOR S.A., por el Dr. Carlos TAU ANZOATEGUI con fecha 13 de Noviembre de 1990;

Que el convenio fue aprobado por el Decreto N° 2082, de fecha 20 de Noviembre de 1990, suscripto por el Vice-Gobernador a cargo, Dr. Oscar Ramón GARBE y el Ministro de Asuntos Institucionales, Sr. Alejandro CORPACCI, habiéndose abonado el cincuenta por ciento (50%) de los honorarios;

Que la Sra. Fiscal de Estado interpone Recurso de Reconsideración contra el Decreto, solicitando su derogación por ser contrario a los intereses del Estado Provincial y violatorio de normas constitucionales;

Que, en los fundamentos del Recurso, se hace mérito de múltiples transgresiones a las normas vigentes, como ser: a) Falta de intervención de Fiscalía de Estado en el juicio y en la tramitación y firma del Convenio a pesar de lo prescripto en el Artículo 162° de la Constitución de la Provincia, por el cual es el órgano con competencia excluyente para atender la defensa judicial del Estado; b) Vilación al trámite y procedimiento transaccional del Código Civil, ya que el Ministro no contaba con autorización para la firma, y el convenio no fue homologado judicialmente (Artículo 838°, Artículo 841° inciso 3°); c) Vulneración a la Ley de Contabilidad N° 2453, Artículos 14° al 20°; d) Transgresión al procedimiento transaccional de la Ley de Emergencia Económica N° 4569 de Adhesión a la Ley Nacional N° 23696, Artículo 55° y concordantes; e) Violación al Artículo 160°, inciso 2° de la Constitución Provincial, en lo atinente a la necesaria intervención de la Asesoría General de Gobierno en el trámite previo a la emisión del

Decreto; f) No se dió la participación de Ley al Tribunal de Cuentas; g) Violación a la Ley de Honorarios N° 21389, artículos 20° y concordantes, al establecerse un honorario desproporcionado en relación a las pautas legales aplicables; h) Que la ilegitimidad del honorario pactado resulta de que, mediando renuncia a la acción resarcitoria, la causa carecía de monto o cuantía, por lo tanto, no cabía estimación económica de base alguna; i) Que no obstante, de considerarse una base económica, la misma debió ser del cincuenta por ciento (50%) del monto del juicio, y con tales pautas legales, el máximo que le hubiera correspondido al Dr. TAU ANZOATEGUI habría significado -a moneda de ese momento- Australes Tres Mil Doscientos Noventa y Siete Millones Doscientos Seis Mil Setecientos Treinta y Cinco (A 3.297.206.735), e incluso si hubiera actuado también como procurador, el máximo ascendería a Australes Cuatro Mil Seiscientos Dieciséis Millones Ochenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Ocho (A 4.616.089.348), cifra que dista mucho del importe de Australes Siete Mil Trescientos Setenta y Dos Millones Ochocientos Mil (A 7.372.800.000) (que significaban los U\$S 1.440.000.000 al momento de la firma del Convenio); j) Que en el primer caso, se asumió una deuda en demasía de Australes Cuatro Mil Setenta y Cinco Millones Quinientos Noventa y Tres Mil Doscientos Sesenta y Cinco (A 4.075.593.265, y en segundo, de Australes Dos Mil Setecientos Cincuenta y Seis Millones Setecientos Diez Mil Seiscientos Cincuenta y Dos (Australes 2.756.710.652); k) Que por otro lado, se aprueba por el Decreto impugnado, una renuncia al derecho por parte de la Provincia de Catamarca a invocar leyes de emergencia en caso de ejecución del honorario, aún cuando por ser normas de orden público, resultan irrenunciables (artículo 21° Código Civil); l) Que, asimismo, los funcionarios actuantes comprometieron a la Provincia en hacerse cargo de los impuestos que gravaban los honorarios convenidos, incrementando aún más la deuda del Estado; ll) Que la maniobra en desmendo del patrimonio provincial concluye con la aprobación de una tasa usuraria de interés punitivo sobre la deuda en dólares, consistente en el uno por ciento (1%) diario, y como el saldo de la deuda era de U\$S 720.000, en el año se registra un incremento del trescientos sesenta y uno por ciento (361%) sobre el dólar, y una deuda actual de U\$S 3.319.200; m) Que existe "prima facie" el ilícito del artículo 248° del Código Penal sin perjuicio de la tipificación de la conducta defraudatoria del artículo 174°, inciso 5° del mismo ordenamiento; Que en función del artículo 119° del Código de Procedimientos Administrativos toma intervención la Asesoría General de Gobierno, organismo que se expide por Dictamen N° 142 del 31 de Enero de 1992, agregado a estos obrados; Que la Asesoría General de Gobierno reconoce legitimación a Fiscalía de Estado para la interposición del Recurso de Reconsideración, en mérito al artículo 162° de la Constitución de la Provincia, como así que el mismo ha sido presentado en término;

Que el dictamen admite, asimismo, la existencia en el Decreto de graves vicios invalidantes del Acto Administrativo por violación a los requisitos esenciales de la Causa, Objeto, Procedimientos, Motivaciones y Finalidad del Acto Administrativo (artículo 27°, incisos b) a f), Ley N° 3559);

Que la Asesoría General de Gobierno entiende la legítima aplicación al caso el artículo 29°, incisos a) y b) de la Ley N° 3559, considerando que el Acto Administrativo impugnado debe sancionarse con la nulidad absoluta e insanable, porque la voluntad de la administración se encuentra excluida, por dolo del funcionario interviniente, y el acto está viciado de falta de causa y violación de la Ley aplicable;

Que por lo tanto considera procedente al recurso, ya que "... El Acto Administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad en sede administrativa..." (artículo 32, Ley N° 3559);

Que en lo referente a la renuncia por TELECOR S.A. a reclamar los daños y perjuicios, por ser un acto unilateral, corresponde darle curso, y emitir otro Decreto aprobatorio de la misma.

Que considera además que deberá promoverse acción judicial por el cobro de las sumas indebidamente pagadas, y efectuarse, la denuncia penal pertinente;

Que por lo expuesto, y demás fundamentos del dictamen de Asesoría General de Gobierno, y lo dispuesto en los Artículos 149°, inciso 2do.; 160° incisos 1ro. y 2do. y 162° de la Constitución Provincial; y artículos 27°, incisos b) a f); 29°, incisos a) y b) y 32° de la Ley N° 3559 (Código de Procedimientos Administrativos); y demás normas ut supra mencionadas;

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto por la Sra. Fiscal de Estado, Dra. Amelia SESTO DE LEIVA, y en su consecuencia dejar sin efecto el Decreto P.E. N° 2082 de fecha 20 de noviembre de 1990 por encontrarse afectado de nulidad absoluta, por los fundamentos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Disponer que la Fiscalía de Estado promueva la acción judicial permanente a efectos del recupero de las sumas indebidamente abonadas por el Estado Provincial en mérito al Decreto N° 2082/90, que se deja sin efecto por el artículo anterior y proceda a plantear la denuncia correspondiente ante la probable configuración de un ilícito penal en perjuicio del patrimonio de la Provincia.

ARTICULO 3°.- Dar intervención al Tribunal de Cuentas a efectos de la promoción del sumario administrativo de responsabilidad (Ley N° 4621).

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y Archívese.-

ARNOLDO ANIBAL CASTILLO  
Gobernador de Catamarca

Dr. GUILLERMO ADOLFO HERRERA  
Ministro de Gobierno y Justicia